



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

15ª REUNION – 9ª SESION ORDINARIA
23 DE JULIO DE 2003

**Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
ingeniero JOSE L. GIOJA, del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS, y del señor vicepresidente
1º del Honorable Senado, don RAUL BAGLINI**

Secretarios:

Señor JUAN HECTOR ESTRADA y señor CARLOS ALBERTO MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES

(PRIMERA PARTE)



PRESENTES:

AGÚNDEZ, Jorge A.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAGLINI, Raúl E.
 BAR, Graciela Y.
 BUSTI, Jorge P.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CASTRO, María E.
 CONTI, Diana
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 GALLIA, Sergio A.
 GIOJA, José L.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. H.
 HALAK, Beatriz S.
 ISIDORI, Amanda M.
 JENEFES, Guillermo R.
 LAMBERTO, Oscar S.
 LATORRE, Roxana I.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 LOSADA, Mario A.
 MAESTRO, Carlos
 MARTÍ, Rubén A.
 MARTÍN, Floriana N.
 MAYANS, Miguel A.
 MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo
 MONTOYA, Jorge L.
 MORALES, Gerardo R.
 MORO, Eduardo A.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 OCHOA, Raúl E.
 PARDAL, Jorge A.
 PARDO, Ángel F.
 PASSO, Juan C.

PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 PRADES, Carlos A.
 RASO, Marta E.
 SALVATORI, Pedro
 SAPAG, Luz M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 VERNÁ, Carlos Alberto
 WALTER, Pablo H.

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.
 CHIAPPE, Lázaro A.

AUSENTE POR ENFERMEDAD:

BARRIONUEVO, José L.

LICENCIA:

USANDIZAGA, Horacio D.

AUSENTES CON AVISO:

ALPEROVICH, José J.
 ARANCIO de BELLER, Lylia M.
 COLAZO, Mario J.
 COLOMBO de ACEVEDO, María T.
 CURLETTI, Mirian B.
 FALCÓ, Luis
 GÓMEZ DE BERTONE, Deolide C.
 IBARRA, Vilma L.
 MERA, Mario R.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PAZ, Elba A.
 PUERTA, Federico R.
 SEGUÍ, Malvina M.
 YOMA, Jorge R.
 ZAVALIA, José L.

COMITIVA PRESIDENCIAL:

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.

SUMARIO

1. **Manifestaciones en minoría.** (Pág. 3624.)
2. **Izamiento de la bandera nacional** en el mástil del recinto. (Pág. 3625.)
3. **Lectura de los Asuntos entrados.** (Pág. 3625.)
4. **Lectura del Plan de labor.** (Pág. 3626.)
5. **Consideración sobre tablas de un proyecto unificado** por el que se rinde homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón (S.-1.514 y 1.516/03). Se aprueba. (Pág. 3627.)
6. **Aprobación del Plan de labor.** (Pág. 3627.)
7. **Consideración sobre tablas de los dictámenes de la Comisión de Acuerdos, para promover al grado inmediato superior al general de brigada Roberto Fernando Bendini y al brigadier**

Carlos Alberto Rohde (P.E.-198/03 y 199/03).
 Se aprueba. (Pág. 3630.)

8. **Pedido de licencia formulado** por el señor senador Chiappe (S.-1.309/03). Se aprueba. (Página 3631.)
9. **Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de resolución remitido por la Honorable Cámara de Diputados** por el que deja sin efecto su similar (**Fondo de Compensación Resarcitoria Temporal**) (C.D.-23/03). Se aprueba. (Pág. 3631.)
10. **Consideración del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós** por el que se adhiere a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de agosto (S.-1.612/02). Se aprueba. (Pág. 3632.)

- del señor **senador Maqueda** (II) por los que se **aprueba el Protocolo Relativo a la Venta de Niños en la Pornografía** (C.D.-130/02 y S.-3.268/02). Se aprueba. (Pág. 3914.)
176. **Consideración sobre tablas del dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión** por el que se crea el **Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados** (C.D.-26/03). Se aprueba. (Pág. 3917.)
177. **Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre creación del Fondo Permanente de Recompensas** (C.D.-27/03). Se aprueba. (Pág. 3926.)
178. **Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de comunicación de los senadores Isidori, Capitanich, Guinle, y Escudero, solicitando se dé solución a la situación de los ex agentes de YPF y se disponga el pago inmediato de las indemnizaciones establecidas en la ley 25.471** (S.-280/02, 26/03, 434 y 1.322/03). Se aprueba. (Pág. 3931.)
179. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Agúndez** por el que se **solicita la puesta en funcionamiento de cámaras federales** en diversas provincias (S.-1.280/03). Se aprueba. (Pág. 3935.)
180. **Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión** por el que se **incorpora un artículo al Código Procesal Penal de la Nación** (C.D.-44/02). Se aprueba. (Pág. 3937.)
181. **Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero y del señor senador López Arias** por el que se **solicita se deje sin efecto la resolución 955/83 del Instituto Nacional de Vitivinicultura**, e insiste en adoptar una nueva **zona de procedencia denominada "Valles Calchaquies de Salta"**, integrada por los departamentos de La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate (S.-3.314 y 3.378/02). Se aprueba. (Pág. 3938.)
182. **Moción de preferencia formulada por el señor senador Guinle con dictamen de comisión**, para ser tratado en la próxima sesión su **proyecto de resolución declarando de interés la obra literaria *Esquel, del Telégrafo al Pavimento*** (S.-1.515/03). Se aprueba. (Pág. 3939.)
183. **Moción de preferencia formulada por la señora senadora Halak**, para ser tratado en la próxima sesión, el **proyecto de ley** de su autoría y del señor **senador Maqueda**, por el que se agravan las **penas de conductas delictivas** cometidas por **miembros de las fuerzas de seguridad** (S.-2.385/02). Se aprueba. (Pág. 3940.)
184. **Moción de preferencia formulada por el señor senador Maestro**, para ser tratado en la próxima sesión el **proyecto de ley** del señor **senador Moro y otros señores senadores**, por el que se **declara de interés histórico y artístico nacional el mural *Ejercicio plástico*** del artista mexicano David Alfaro Siqueiros (S.-928/03). Se aprueba. (Pág. 3940.)
185. **Moción de preferencia formulada por la señora senadora Bar** para ser tratado en la próxima sesión el **dictamen en las modificaciones** introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al **proyecto de ley** que le fue pasado en **revisión sobre operatoria de las cajas de crédito** (S.-1.420/02). Se aprueba. (Pág. 3940.)
186. **Moción de preferencia formulada por el señor senador Fernández**, con **dictamen de comisión**, para ser tratado en la próxima sesión el **proyecto de ley en revisión sobre modificación del artículo 23 del Código Penal**, acerca de los instrumentos del delito (C.D.-36/03). Se aprueba. (Pág. 3940.)
187. **Moción de preferencia formulada por la señora senadora Escudero**, con o sin dictamen de comisión, para ser tratado en la próxima sesión, el **proyecto de comunicación** conmemorando el **segundo aniversario** de la entrada en vigor del **Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en Países Independientes** (S.-1.297/03). Se aprueba. (Pág. 3940.)
188. A **pedido** del señor **senador Pichetto** se vuelve a revisar el **proyecto de ley sobre modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación**, introduciendo una modificación propuesta por el señor senador Pardo (C.D.-36/03). Se aprueba. (Pág. 3941.)
189. **Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Escudero** por el que se **declara de interés legislativo la Primera Clínica Jurídica y Organizacional para Comunidades Indígenas**, desde el día 30 de junio al día 4 de julio del corriente año en la localidad de Tartagal, departamento de San Martín de la provincia de Salta (S.-1.298/03). Se aprueba. (Pág. 3942.)
190. **Asuntos Entrados:**
- I. **Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.** (Pág. 3944.)

CXCV. **Proyecto de ley del mismo señor senador creando el Programa Integral de Atención para la Población con Esclerosis Múltiple** (S.-1.501/03). (Pág. 4167.)

CXCVI. **Proyecto de declaración del mismo señor senador declarando de interés el programa "Súper Sopa" de la Universidad Nacional de Quilmes** (S.-1.502/03). (Pág. 4169.)

CXCVII. **Proyecto de declaración del mismo señor senador repudiando las expresiones antisemitas vertidas por Julio Grondona** (S.-1.503/03). (Pág. 4170.)

CXCVIII. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador expresando beneplácito por el desarrollo de un sistema de comunicación para personas discapacitadas denominado "Parlex" por alumnos de la Escuela Técnica N° 6 de La Matanza** (S.-1.504/03). (Pág. 4171.)

CXCIX. **Proyecto de ley del señor senador Pichetto, modificando el Código Penal y el Código Procesal Penal en lo que respecta a conductas clandestinas en materia de radiodifusión** (S.-1.505/03). (Pág. 4172.)

CC. **Proyecto de comunicación del señor senador Taffarel, solicitando se implementen acciones de cooperación con Paraguay y Brasil respecto a los métodos de control del hongo "roya asiática" que afecta a la soja** (S.-1.506/03). (Pág. 4173.)

CCI. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador solicitando informes acerca de la realización de ejercicios militares conjuntos con fuerzas aéreas extranjeras durante el transcurso del año 2003** (S.-1.507/03). (Pág. 4174.)

CCII. **Proyecto de comunicación del señor senador Salvatori solicitando informes acerca de la relación entre el Banco Central y el Tesoro nacional, en el marco de lo dispuesto por la ley 24.144** (S.-1.508/03). (Pág. 4175.)

CCIII. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador solicitando informes sobre las transferencias de ganancias realizadas por el Banco Central de la República Argentina al Tesoro nacional** (S.-1.509/03). (Pág. 4175.)

CCTV. **Proyecto de comunicación del mismo señor senador solicitando la remisión a esta Honorable Cámara del modelo de política monetaria basado en objetivos de tasa de inflación** (S.-1.510/03). (Pág. 4176.)

CCV. **Proyecto de declaración del mismo señor senador solicitando medidas para restablecer el ciclo de crédito en el país** (S.-1.511/03). (Pág. 4177.)

CCVI. **Proyecto de comunicación del señor senador Caffero, solicitando informes acerca del seguimiento de la concurrencia escolar y el control de la salud a los hijos menores de los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar** (S.-1.512/03). (Pág. 4177.)

CCVII. **Proyecto de declaración del señor senador Gallia, declarando de interés parlamentario el Simposio "Mercosur-Corredores Ferroviarios Biocénicos Multinacionales", a realizarse el 13 de agosto del corriente año en Buenos Aires** (S.-1.513/03). (Pág. 4178.)

CCVIII. **Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento** (S.-1.514/03). (Pág. 4179.)

CCIX. **Proyecto de resolución del señor senador Guinle, declarando de interés la obra literaria *Esquel, del telégrafo al pavimento*, de Jorge Oriola y autorizando la impresión de ejemplares** (S.-1.515/03). (Pág. 4180.)

CCX. **Proyecto de declaración de la señora senadora Halak y otros señores senadores, rindiendo homenaje a Eva Perón al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte** (S.-1.516/03). (Pág. 4181.)

190. Apéndice:

I. Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 4181.)

—En Buenos Aires, a las 15 del miércoles 23 de julio de 2003:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que dentro de aproximadamente diez minutos se comience a pasar lista.

En la reunión de Labor Parlamentaria de ayer acordamos una hora de iniciación de la sesión, que ya lleva más de una hora de demora. Por lo tanto, que en algún momento la palabra valga en este recinto. Si asumimos un compromiso, cumplámoslo.

Solicito que pida a los secretarios de los bloques que llamen a los senadores para que vengán al recinto.

Sr. Presidente (Gioja). – Así se hará; se continuará llamando durante diez minutos. Solicito a los presidentes, secretarios y auxiliares de los bloques que por favor avisen a los senadores que vengán al recinto.

–Luego de unos instantes:

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Gioja). – Con quórum reglamentario, queda abierta la sesión.

Invito al señor senador por la provincia de Jujuy, senador Morales, a izar la bandera en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, el senador Gerardo R. Morales procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. *(Aplausos.)*

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Gioja). – Por Secretaría se dará lectura a mensajes ingresados del Poder Ejecutivo por los que se solicitan acuerdos.

Sr. Secretario (Estrada). – *(Lee)*

–El texto es el siguiente:

Buenos Aires, 3 de julio de 2003.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la República Argentina al licenciado don Alfredo Arturo O'Connell (matrícula individual 4.136.689), de conformidad con lo establecido por el artículo 7° de la

carta orgánica de dicha institución, para completar un período de ley.

Se acompaña el curriculum vitae correspondiente al funcionario propuesto*.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 314

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Roberto Lavagna.

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 3 de julio de 2003.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar director del Banco Central de la República Argentina al licenciado en Economía don Eduardo Cafaro (matrícula individual 6.151.474), de conformidad con lo establecido por el artículo 7° de la carta orgánica de dicha institución, para completar un período de ley.

Se acompaña el curriculum vitae correspondiente al funcionario propuesto*.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 316

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Roberto Lavagna.

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 3 de julio de 2003.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Hernán María Patiño Mayer (matrícula individual 8.270.427), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación.

Se acompaña curriculum vitae*.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 318

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Rafael A. Bielsa.

–A la Comisión de Acuerdos.

Sr. Presidente (Gioja). – Pasan a las comisiones respectivas.

Tiene la palabra el señor senador Martí.

* No se publica.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador Maestro.

Sr. Maestro. – Señor presidente: el bloque del radicalismo va a acompañar plenamente este proyecto, como lo ha hecho en su momento en la Cámara de Diputados.

Coincidimos con la importancia que le asigna a la aprobación de este protocolo el senador preopinante por La Rioja. Y nosotros ratificamos una vez más nuestro compromiso, que creo es el compromiso de todos los que tienen representaciones públicas institucionales, de trabajar –y en este caso, legislar– teniendo especial cuidado y poniendo el acento en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Al respecto, me permito la licencia de hacer referencia en este momento a un testimonio gráfico conmovedor que hoy tuvimos la oportunidad de ver en la tapa de un importante matutino de la Capital. Allí veíamos a un niño que está sometido a tratamiento oncológico, junto con mucha otra gente que no está pudiendo recibir la adecuada atención.

Así que impetramos que tenga éxito el nuevo gobierno en poder resolver esta cuestión, que es realmente muy afligente.

Estamos volcando recursos a muchas cosas, incluso hoy seguramente vamos a votar un proyecto destinando recursos a compensar a quienes hagan posible el esclarecimiento de determinados hechos delictivos; es un solo ejemplo de las muchas derivaciones de fondos públicos que se hacen para distintos fines. Entonces, nos parece que todo lo que haga a la atención de los sectores más desprotegidos de la sociedad debe ser siempre el compromiso de todo hombre público.

Entonces, por supuesto acompañamos este proyecto que ha defendido recién muy bien el senador por La Rioja. Y si bien lo que está sucediendo en materia de tratamientos oncológicos ha sucedido otras veces en anteriores gobiernos y es un tema recurrente, aprovechamos también esta oportunidad para destacar la necesidad de que, de una vez y para siempre, logremos superar una cuestión que no creo que comprometa precisamente el futuro de la economía nacional.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy breve.

En primer lugar, me parece que por Secretaría hay que hacer una tarea, que es la de incor-

porar al debate de esta tarde los conceptos y los fundamentos que dieron, muy especialmente, los dos senadores de mi bloque –la senadora Perceval y el senador Menem– y otros senadores que hablaron esa noche en la que, lamentablemente, se levantó la sesión.

También quiero ratificar lo que dije en el momento en que se trataba el tema: el análisis y valoración de la firma de un convenio como éste –que tiene carácter internacional y que rescata los derechos del niño– nos tiene que servir de base para avanzar en una legislación propia de carácter nacional. En ese sentido, el Senado debe trabajar sobre cuestiones que hacen a legislar y penalizar el uso de pornografía en la red.

Este es uno de los temas más complejos y que no tiene normas específicas y puntuales en el Código Penal que permitan condenar estas conductas deletzables que involucran a menores de edad.

Esto lo había dicho en la anterior sesión y me parece que nosotros, como Senado, tenemos una deuda que en algún momento deberemos saldar. Esperemos que nos podamos abocar a la brevedad a tratar esta cuestión.

Sr. Presidente (Gioja). – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

176

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION A TESTIGOS E IMPUTADOS

Sr. Presidente (Gioja). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. (Orden del Día N° 361.)

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.

–La votación resulta afirmativa.

–El texto es el siguiente

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el proyecto de ley venido en revi-

sión (CD.-26/03), creando el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados; y, por las razones que dará el miembro informante y los fundamentos que se acompañan, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 24 de junio de 2003.

*Jorge A. Agúndez. – Jorge P. Busti. –
Malvina M. Seguí. – Amanda M. Isidori.
– Carlos A. Prades.*

En disidencia parcial:

*Wilma L. Ibarra. – Diana Conti. – Miguel
A. Pichetto.*

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

Señor presidente:

En el dictamen que ha elaborado esta comisión se aconseja la aprobación del proyecto de ley venido en revisión (C.D.-26/03), creando el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, por entender que surge como razonable que dicho programa funcione en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, encomendándose su dirección a un director nacional que designe el ministro responsable del área.

Es de destacar que en las reuniones celebradas en el ámbito de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se debatió la cuestión referente al órgano competente para el manejo del programa, asistiendo a esas reuniones diversos funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Las posturas sustentadas fueron, por un lado, que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados debía funcionar en la órbita de la Procuración General de la Nación, como una forma de acentuar el carácter acusatorio del procedimiento penal a tal efecto se presentó a esta comisión la posición fundamentada por escrito. Por su parte, de otro lado se argumentaba que el programa funcionará con absoluta eficiencia en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, afirmando el secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios, en representación del Ministerio de Justicia, a que "es intención cierta desde el Ministerio una vez que se apruebe este proyecto, hacer un convenio con la Procuración. De manera tal que el programa quede gerenciado o, de alguna forma, manejado por la Procuración General de La Nación, en un convenio con el Ministerio de Justicia".

Debe destacarse que cuando se trató este proyecto de ley en la Cámara de Diputados la señora

diputada Falbo, en su carácter de miembro informante del dictamen de comisión, señaló: "En el artículo 8º se establece el ámbito en el que funcionará este programa, que es el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Esto ha sido conversado con las anteriores autoridades del ministerio y con el actual ministro. En cierto modo es una forma de economizar, porque en ese ministerio ya existen diversos registros que funcionan perfectamente bien, no requiriéndose un nuevo sistema con nuevos empleados, funcionarios, etcétera..."

Asimismo, debe tenerse en cuenta que al elevar el proyecto al Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo propuso que el programa funcionase en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

En el mensaje de elevación se señaló que el proyecto había sido elaborado en base a las conclusiones de la Comisión Asesora para la Prevención del Secuestro de Personas, creada por decreto 1.651/02 e integrada por destacados especialistas en la materia, y con la participación de los señores senadores Miguel Angel Pichetto y Jorge Alfredo Agúndez, miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de esta Cámara.

Por los motivos expuestos, en este dictamen se hacen propios los fundamentos sostenidos en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo.

*Jorge A. Agúndez. – Jorge P. Busti. –
Malvina M. Seguí. – Carlos A. Prades.*

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

(4 de junio de 2003)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los previstos por las leyes 23.737 y 25.241.

Sin perjuicio de ello, a requerimiento de la autoridad judicial, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos podrá incluir fundadamente otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable.

Art. 2º – Las medidas de protección serán dispuestas, de oficio o a petición del fiscal, por el juez

o tribunal a cargo de la causa en que se recibiera la declaración que justificara tal temperamento. El órgano judicial competente, con carácter previo, deberá recabar:

- a) La opinión del procurador general o del magistrado del Ministerio Público en el que aquél delegue la mencionada función, cuando no hubiese sido requerido por éste;
- b) La conformidad del director nacional de protección a testigos e imputados.

Hasta que ello suceda la situación quedará a cargo del juez o tribunal en los términos del artículo 79, inciso c), del Código Procesal Penal de la Nación.

En el supuesto de peligro en la demora o inconveniencia de que se adopten las medidas señaladas en el párrafo anterior, se deberá producir el ingreso provisorio de la persona al programa y realizar las medidas de protección que correspondan.

Art. 3° - La aplicación del presente programa, a los fines de la adecuada distribución y asignación de los recursos disponibles del Estado nacional, dependerá de la concurrencia de los recaudos siguientes:

- a) Presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad física de una persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal;
- b) Interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social;
- c) Validez, verosimilitud e importancia del aporte de la persona cuya protección se requiere para la investigación y juicio penal correspondiente;
- d) Viabilidad de la aplicación de las medidas especiales de protección;
- e) Adaptabilidad de la persona a las medidas especiales de protección.

Art. 4° - Las medidas especiales de protección previstas en esta ley podrán ser aplicadas a todas o algunas de las personas que convivan con la persona bajo amenaza.

Art. 5° - Las medidas especiales de protección, cuando las circunstancias lo permitan y lo hagan aconsejable, podrán consistir en:

- a) La custodia personal o domiciliaria;
- b) El alojamiento temporario en lugares reservados;
- c) El cambio de domicilio;
- d) El suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y

demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. En ningún caso la asistencia económica se otorgará por más de seis (6) meses;

- e) La asistencia para la gestión de trámites;
- f) La asistencia para la reinserción laboral;
- g) El suministro de documentación que acredite identidad bajo nombre supuesto a los fines de mantener en reserva la ubicación de la persona protegida y su grupo familiar.

Art. 6° - Es condición inexcusable para la admisión y permanencia del sujeto beneficiario en las previsiones del presente programa la aceptación escrita del cumplimiento obligatorio de las siguientes disposiciones:

- a) Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de la situación de protección y de las medidas adoptadas;
- b) Someterse, en caso de ser necesario, a los exámenes médicos, psicológicos, físicos y socioambientales que permitan evaluar su capacidad de adaptación a las medidas que fuera necesario adoptar;
- c) Prestar el consentimiento, en caso de ser necesario, para que se realicen las medidas previstas en el inciso anterior, respecto de menores o incapaces que se encuentren bajo su patria potestad, guarda, tutela o curatela;
- d) Presentar una declaración jurada patrimonial sobre su activo, pasivo, juicios o acciones judiciales pendientes y demás obligaciones legales;
- e) Colaborar con el mantenimiento de las relaciones de filiación entre padres o madres e hijos menores de edad y de las obligaciones alimentarias que pudieran existir;
- f) Mantenerse dentro de límites impuestos por las medidas especiales de protección;
- g) Cambiar de domicilio cada vez que sea necesario y, cuando corresponda, recibir el bien que le haya sido gestionado. En estos casos el presente programa proveerá la gestión de inmuebles a través de los planes habitacionales del Estado, con cargo a la persona beneficiaria;
- h) Abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo o más allá de la capacidad de alcance operativo del personal asignado para la protección;
- i) Respetar los límites impuestos por las medidas especiales de protección y las instrucciones que a tal efecto se le impartan;
- j) Comprometerse a no cometer delitos o contravenciones.

Art. 7º - El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el artículo precedente debidamente comprobada será causal suficiente para disponer judicialmente su exclusión del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Art. 8º - El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y será dirigido por un Director Nacional, designado por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Art. 9º - El Director Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados tendrá las siguientes facultades:

- a) Llevar adelante las medidas de protección adecuadas a cada caso y a las posibilidades de adaptación a ellas por parte de las personas beneficiadas. A tales fines podrá requerir estudios psicológicos, clínicos, ambientales y todos aquellos que considere pertinentes;
- b) Efectuar las comunicaciones relativas al seguimiento de cada caso a las autoridades que hubieran requerido la protección y determinar los distintos aspectos de la aplicación del programa;
- c) Encomendar la ejecución material de las medidas especiales de protección a las fuerzas de seguridad, policiales y servicio penitenciario, quienes deberán cumplirlas en tiempo y forma, aportando servicios de custodia, informes técnicos o socioambientales y cualquier otro servicio que, por razones de inmediatez y reserva del caso, se lo estime necesario. A tal fin el responsable del área gubernamental respectiva deberá designar al funcionario encargado de las acciones señaladas en este inciso, en lo que a su competencia corresponda y disponer las medidas conducentes para afrontar los gastos que aquéllas demanden;
- d) Requerir de los organismos o dependencias de la administración pública la intervención para suministrar servicios específicos, así como la confección de trámites y provisión de documentación e información. Los funcionarios responsables de los organismos y dependencias de la administración pública cumplirán en tiempo y forma con lo requerido, bajo apercibimiento de ser considerado el incumplimiento como falta grave;
- e) Realizar pagos, contrataciones y erogaciones de carácter reservado para el cumplimiento de las medidas de protección;
- f) Requerir al juez que dispuso la protección su cese cuando las circunstancias así lo aconsejaren;

- g) Proponer la celebración de convenios y mantener relaciones a nivel nacional e internacional con organismos o instituciones públicas o privadas, de carácter nacional o internacional, dando oportuna intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Los actos administrativos tendientes a llevar adelante el programa serán discrecionales, sin necesidad de sustanciación previa. No será admisible recurso administrativo alguno contra dichos actos.

Art. 10. - Facúltase al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos a dictar las resoluciones correspondientes a los fines de la adecuada y racional aplicación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Art. 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

ACLARACION

El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al mensaje 2.143 del Poder Ejecutivo de fecha 24-10-02.

Sr. Presidente (Gioja). - En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. - Señor presidente: para terminar el plan estratégico que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo, no solamente en esta nueva integración sino también en la anterior, es necesario que el Congreso de la Nación, en este caso el Senado de la Nación, apruebe los proyectos de protección de testigos e imputados arrepentidos y del programa permanente de recompensas, que en el día de la fecha seguramente podremos aprobar. Esto contribuirá a brindar al Poder Ejecutivo y a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para el esclarecimiento de los delitos y la mayor protección de las partes.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Raúl E. Baglini.

Sr. Agúndez. - Este proyecto ha sido tratado en la Cámara de Diputados, pero tengo que decir que data aproximadamente de dos años atrás. Desde que fuera remitido por la Cámara de Diputados lleva más o menos cuatro o cinco meses en análisis en esta Cámara.

Esta iniciativa se ha tratado en innumerables oportunidades en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales pero, desgraciadamente, por algunas modificaciones que se pretende introducir, evidentemente este proyecto tendrá que volver a la Cámara de Diputados. De esa manera, seguramente atrasaremos la oportunidad de su sanción definitiva. Muchas veces es preferible la oportunidad antes que la perfectibilidad de los proyectos.

Para tratar este tema hemos citado al procurador general y a los secretarios del Ministerio de Justicia, doctores Lanusse, Quantín y Ortiz, y hemos conversado acerca de la posibilidad de introducir algunas reformas. Pero el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que implementar la orientación de la política criminal, había aconsejado en reiteradas oportunidades que el proyecto se aprobara en estas condiciones.

Quiero aclarar que estas dos iniciativas, relativas a los delitos más horribles que existen en el Código Penal, evidentemente son de importancia secundaria. Por eso digo que algunas imperfecciones que tiene el proyecto pueden ser zanjadas por el Poder Ejecutivo. Ese fue el compromiso que ellos tuvieron.

En base al proyecto de protección nacional de testigos e imputados para los delitos federales, se habían planteado cuatro o cinco observaciones que voy a mencionar. Y como en este caso el bloque mayoritario tendrá la decisión, si se quiere reformular la iniciativa, tendrá que volver a la Cámara de Diputados. De lo contrario, estas cuestiones se pueden soslayar y ser cumplimentadas con el decreto reglamentario que dicte el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, como mi bloque considera que el problema de seguridad es un problema de Estado y no de partidos políticos ni de bloques, me ha encomendado la tarea de colaborar inmediatamente para la sanción de las leyes importantes. Porque es cierto que en esta sociedad argentina hay un sentido de inseguridad, más allá de lo que marcan los índices reales de los delitos. Pero no es menos cierto que, más allá de todas estas apariciones en los medios de comunicación del ministro y sus colaboradores —si bien se ha avanzado más en las apariciones televisivas que en los hechos concretos de la legislación—, está surgiendo en la Argentina la posibilidad de protección por parte del Estado respecto de los temas de seguridad.

Uno de los primeros temas lo han planteado por escrito y me vi en la obligación de notificar a cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales a los efectos de que hicieran mención —por escrito— de aquellas modificaciones que quisieran introducir. Las únicas modificaciones que he recibido son de las señoras senadoras Isidori e Ibarra.

El primer tema se refería a los criterios que se utilizan a los efectos de aceptar la autoridad de aplicación, en el sentido de si era en el Ministerio de Justicia o la Procuración General de la Nación. En ese momento vino el procurador general, el doctor Nicolás Becerra, y expresó que lo mejor sería que esto estuviese enmarcado en la jurisdicción de la Procuración General, no así el ministro y sus colaboradores que creían importante que se enmarque en el orden del Ministerio de Justicia, habida cuenta de que los recursos que se necesitan eran propios de la administración. Y los recursos de la administración eran los que, en definitiva, podían dar el número de protecciones a los distintos testigos o imputados arrepentidos en los delitos que enmarca la normativa del proyecto.

Es real que el proyecto alternativo presentado por el procurador general parte de una base en cierta manera errónea. El procurador general presenta un proyecto de protección de testigos basado en el artículo 79 del Código Procesal Penal, y ese capítulo precisamente trata de la protección del testigo y la víctima, no del testigo y del imputado, como indica el proyecto que estamos tratando.

Como ustedes saben, el abogado no puede hablar con los testigos de oficio, pero tampoco el fiscal puede hacerlo con el imputado. Por lo tanto, esta posibilidad que marcaba el procurador, en el sentido de que el fiscal tenía que cubrir y resguardar a los testigos de cargo, no sería viable en el caso de los imputados. Por consiguiente, esa fundamentación resulta de base relativamente cierta.

Lo real y concreto es que el procurador general va a seguir sosteniendo la norma del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal ya que se trata de una protección de tipo ordinaria. Lo que nosotros tratamos en este proyecto es una protección de tipo especial o extraordinaria. Y el artículo 1º taxativamente señala los motivos y requisitos necesarios, y para qué clase de delito

se otorga. Por eso dicho artículo se refiere a la seguridad del imputado y del testigo cuando esté en peligro la vida y la integridad física, y cuyos datos sean trascendentes y eficaces.

¿Para qué tipo de delito? Precisamente, para la privación ilegítima de la libertad, contemplada en el artículo 142, para el secuestro legislado en el artículo 170, y en los casos de terrorismo previstos por la ley 23.737 y de estupefacientes, contemplados en la ley 25.241. En definitiva, con este proyecto se ha querido unificar el tema de la protección de los testigos e imputados en estos delitos, que son los de mayor envergadura en cuanto al disvalor que la sociedad les asigna.

Es cierto que en la segunda parte, buscando una futura organización más clara de los temas de inseguridad que van apareciendo en la Argentina —sin perjuicio de estos cuatro delitos que había marcado— la autoridad judicial podría enmarcar este programa especial cuando se trata de delitos vinculados con la delincuencia organizada, la violencia institucional u otra tendencia del interés político criminal de la causa. O sea que este tema tiene que ver con la ampliación de todos estos delitos que estamos tratando.

El artículo 2º se refiere, fundamentalmente, a quién puede pedir la protección. Es evidente que la sanción de la Cámara de Diputados no habla, específicamente, del testigo. Pero si la pueden pedir el fiscal, el juez y también el tribunal, con mayor razón la podría pedir el propio interesado.

Sin embargo, esa omisión no se debió a un olvido sino a que muchos testigos en este tipo de delitos aberrantes no quieren pedir la protección, al menos por derecho propio, sino que prefieren que ella sea pedida por intermedio del fiscal interviniente.

Es cierto que cuando se habló de la jurisdicción y la autoridad de aplicación sobre este tema estuvieron presentes en el seno de la comisión los representantes del Ministerio de Justicia y el procurador general de la Nación, doctor Nicolás Becerra. Pero en definitiva, como indican las versiones taquigráficas de dichas reuniones, allí se quedó en que se iba a buscar convenios alternativos a los efectos de no demorar esta cuestión, y que el procurador seguiría atendiendo la protección especial del artículo 79, mientras que este programa especial para los delitos más graves quedaría en manos del Ministerio de Justicia.

Se ha afirmado también —en función de lo prescripto por el artículo 2º— que no existe la posibilidad de pedir la protección por parte del testigo. Pero como he explicado anteriormente, quien puede lo más, puede lo menos. Por lo tanto, si bien se trata de una objeción clara a dicho artículo, no es algo determinante para que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados.

Asimismo, la señora senadora Negre de Alonso formuló una objeción —que es correcta— con respecto a dicho artículo, referida al inciso a), que habla de recabar la opinión del procurador general o del magistrado del ministerio público en el que aquél delegue la mencionada función, cuando no hubiese sido requerido por éste. Evidentemente, a través del decreto reglamentario respectivo se podría aclarar perfectamente esta cuestión, porque la opinión se pide al procurador o a quien delegare la función. Así que sería práctico solucionarlo a través del decreto reglamentario.

La segunda parte de la norma se refiere a la conformidad del director nacional de protección a testigos e imputados. Al respecto algunos han señalado que no es posible que la faz administrativa pueda frenar una decisión judicial. Sin embargo, la conformidad de dicho director, a la que se refiere el artículo, tiene que ver con los aspectos administrativos, o sea, con los gastos y los materiales vinculados al tema.

Además, como los señores senadores saben, de acuerdo con lo que se vote en el presupuesto no puede ser ilimitado el número de testigos que se podrían proteger a través de este sistema, sino que eventualmente habrá que seleccionar a los más importantes.

Por otra parte, dicho artículo contempla la posibilidad de la opinión del procurador como la conformidad del director nacional —cubierta por el artículo 79 inciso c) del Código Procesal— en cuanto a la integración física y moral, incluso de la familia del imputado o del procesado.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Marcelo E. López Arias.

Sr. Agúndez. — Quiero aclarar que la última parte del artículo 2º fue incorporada por la Cámara de Diputados —se trata de un ingreso provisorio— y se refiere al supuesto en que la demora pusiere en peligro la integridad física o

moral de la víctima. Por lo tanto, es algo que también se ha contemplado.

Quiero también hacer una aclaración sobre los recaudos exigidos por el artículo 3º para la aplicación de este programa en cuanto a la necesidad de un peligro cierto para ingresar en el sistema de protección. Tiene que haber también un interés público trascendente y debe existir un importante aporte de información, viabilidad de la aplicación de las medidas de protección y adaptabilidad a dichas medidas por parte de aquellas personas que ingresen en el programa.

El artículo 4º trata sobre la familia conviviente, que también estará protegida por el programa si así lo expresa el pedido.

En el artículo 5º tenemos una serie de enumeraciones, donde están las medidas especiales, que van desde la custodia hasta la asistencia para la gestión de trámites y suministro de documentación que acredite la identidad bajo nombres supuestos. Es decir, una serie administrativa para que en el período de protección, el imputado que ha dado una información de valía para la investigación y la sanción de los delinquentes tenga la posibilidad de acceder a estas medidas especiales.

Las condiciones de la protección están en el artículo 6º, y en ese sentido se enumera una serie de exigencias a los efectos de mantener a la persona en este sistema. En el inciso d) de este artículo se habla de la necesidad de presentar una declaración jurada patrimonial sobre activo y pasivo, juicios o acciones judiciales pendientes y demás obligaciones legales. Evidentemente, cuando se trata de testigos o imputados arrepentidos, la mayoría son indigentes que no podrían cumplir con estos requisitos. Me da la impresión —esto es lo que se ha querido poner— que simplemente es una declaración sobre si tiene bienes o no, porque de acuerdo a eso se podría dar o no la protección y los gastos en determinadas situaciones.

Considero que el juez en su interpretación tendrá que determinar aquellos casos en que no se podrá cumplimentar esta declaración, que no es para presentar ante la AFIP, sino que es una declaración que tiene que estar dentro del documento del registro de protección de testigos e imputados.

En el inciso j) también se han dado posibilidades a esta materia en el sentido de que en

este caso el protegido deberá comprometerse a no cometer delitos y contravenciones. Con muy buen criterio muchos senadores se han referido a si, frente a un accidente de tránsito totalmente involuntario o culposos, podría retirársele la protección a un testigo. Evidentemente desde el punto de vista de la perfección de la norma, les asiste razón pero también debemos dejar una interpretación para el juez porque sabemos que en algunos casos puede haber contravenciones reiteradas.

Considero que si la mayoría decide que vuelva a Diputados, por supuesto aceptaremos ese temperamento. De lo contrario, repito, la oportunidad de la sanción me parece que es más fuerte que cualquier redacción perfectible.

El artículo 8º crea el programa en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y se crea un director nacional para darle cierta posibilidad de decisión, modificando la redacción originaria del Poder Ejecutivo, en donde se hablaba de un administrador y no de un director con capacidad de decisión sobre ciertos temas administrativos que hacen a este tipo de protección.

En el artículo 9º se establecen las facultades del director nacional. En eso ustedes van a ver claramente que todas esas facultades son de carácter administrativo, no judiciales.

Y para evitar dudas, se establece que el director nacional del programa no podrá pedir de ningún modo la protección del testigo. Simplemente él decide sobre los aspectos exclusivamente administrativos.

Además, el director podrá requerirle al juez que dispuso la protección, que la misma cese cuando las circunstancias así lo aconsejen. Pero de todas maneras, la decisión siempre está en manos del Poder Judicial y, en este caso, del juez.

Esta norma que se propicia tiene antecedentes en numerosas provincias, como por ejemplo en la de Buenos Aires con el caso Cabezas.

En ese tiempo, en la mayoría de las provincias se estableció ese instrumento por medio de decretos de los Poderes Ejecutivos, al igual que en el caso de las recompensas. Ahora, y ante el auge de estos delitos graves, estamos avanzando hacia una ley nacional de protección de testigos.

Por eso considero que las modificaciones que se le puedan hacer no tienen la entidad suficiente para suplir el apuro del Ejecutivo, ya que

la situación de inseguridad en nuestro país es cada vez más grave.

En consecuencia, hemos realizado un trabajo concienzudo en pos de la búsqueda de los mejores instrumentos para paliar esta situación. No sé si en la práctica esta norma dará resultado; eso se verá cuando se implemente.

En virtud de que consideramos beneficioso este programa estratégico que está encarando el Poder Ejecutivo —complementando lo que se venía haciendo desde hace un año— vamos a brindar todo nuestro apoyo.

Por lo tanto, sería bueno que aprobemos hoy esta propuesta. De lo contrario —y si el bloque de la mayoría tiene algunas observaciones—, daríamos cabida a todas las modificaciones y el proyecto volvería a la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: tal como expresó el senador Agúndez, este proyecto ha sido intensamente analizado y discutido en el ámbito de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Indudablemente surgieron algunas dudas. El procurador general planteó en la comisión un eje bastante legítimo en el sentido de que este instituto debería estar en el ámbito del Ministerio Público. El nos planteó una serie de interrogantes que consultamos con el ministro de Justicia, quien nos ratificó la voluntad de que quede dentro del ámbito del Ministerio de Justicia.

Podríamos incorporar algunas correcciones a esta iniciativa, pero ello determinaría seguramente demoras en su sanción, ya que tendría que volver a la Cámara de Diputados.

Simplemente queremos dotar al Poder Ejecutivo —fundamentalmente a las fuerzas de seguridad— de los instrumentos que complementan una tarea que realizamos apuntando a disponer de una legislación especial para la lucha contra los secuestros extorsivos.

Este delito tiene, en la actualidad, una dimensión realmente peligrosa. La sociedad está agobiada por este accionar delictivo que complementa las dos figuras, es decir, la del secuestro extorsivo y la de la privación ilegítima de la libertad. Además se da en ambas, tanto en la figura del secuestro expreso como en la del secuestro extorsivo prolongado por la búsqueda

de recursos económicos por parte de los familiares de la víctima.

Por estos motivos es que apoyaremos la iniciativa tal como vino de la Cámara de Diputados.

Quiero expresar también algunas dudas y el deseo de que este instituto pueda funcionar adecuadamente en la Argentina. Los países serios, los países desarrollados de Europa y los Estados Unidos de América han trabajado muy bien con el instituto de protección de testigos y arrepentidos que conforman parte de organizaciones delictivas y que indudablemente requieren del cambio de lugar donde viven y también del cambio de su identidad.

La legislación argentina limita el cambio de identidad. Existen dificultades fundamentalmente en orden a que el nombre es un atributo de la personalidad y no está la posibilidad de cambiarlo. Esperemos que éste sea el primer paso y que este instituto funcione bien, que sirva para proteger al testigo para que pueda dar testimonio en causas de resonancia, de envergadura que nos permitan detectar organizaciones mafioso-delictivas que hoy están operando en la Argentina.

No hagamos las cosas de manera “trucha”, donde el único protegido va a ser el director del instituto, para no poner en riesgo la vida de estas personas con decisiones burocráticas. Me refiero concretamente a estos pedidos de informes sobre el patrimonio que parece que fueran formularios que habría que llenar para entrar a la facultad y no a un espacio de protección donde lo que está en juego es la vida del declarante, del testigo o del arrepentido y de su familia.

Lo que tenemos que asumir los argentinos, de una vez por todas, es que existen organizaciones delictivas poderosas operando en el país; especialmente en el escenario del territorio bonaerense y de la propia Ciudad de Buenos Aires, que es donde tenemos la mayor concentración urbana.

Cuando hablamos de robo de automotores nos referimos a desarmaderos y a bandas de delincuentes organizados. Aquí no hablamos de delincuentes individuales que salen deportivamente a robarse un “autito” para usarlo un sábado a la noche. Acá hablamos de robo de autos de manera organizada.

Ayer la senadora Escudero, presidenta de la comisión, convocó al secretario de Seguridad,

doctor Quantín, y en el intercambio de opiniones planteamos todas estas dudas.

El desafío que tiene el Congreso en esta materia es vital para tratar de cambiar la tendencia grave que afecta al país; tendencia gravísima que es uno de los problemas que está agobiando hoy a los ciudadanos argentinos y de manera especial a los ciudadanos de los grandes centros urbanos. La existencia del delito organizado y de las graves anomalías que se dan en el funcionamiento de las policías es uno de los grandes desafíos de la democracia argentina. Otro es el control de las fuerzas policiales para ponerlas en cauce y lograr que trabajen con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Espero, entonces, señor presidente, que este instituto resulte útil y que no se haga de él una herramienta que no sirva para nada, como muchas veces ocurre en este país en donde la implementación por funcionarios incapaces o mediocres termina convirtiendo a estos instrumentos en un verdadero riesgo para aquellas personas que, con valentía, están dispuestas a hablar y a brindar información a los jueces de la causa.

Dicho esto, señor presidente, vamos a acompañar el dictamen de la Comisión. Vamos a darle al Poder Ejecutivo este instrumento que –juntamente con otra iniciativa que vamos a tratar a continuación, que es el instituto de la recompensa– estaría complementando toda la legislación antisecuestro que está necesitando nuestro país.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Baglini.

Sr. Baglini. – Señor presidente: este es un proyecto de ley que –como acaba de decir el señor senador preopinante– completa el paquete de la legislación antisecuestro. Yo quiero destacar que cuando leí algunas observaciones de los miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales al dictamen y algunas firmas en disidencia parcial, me interesé en preguntarle al senador Agúndez cuáles eran los motivos de algunas de aquellas.

La verdad es que siempre estamos entre el apuro por completar el paquete de leyes y la eficacia de los institutos. Esto me preocupa porque hoy en día no hay área más sensible al higo popular que los problemas que hacen al trabajo, a la situación social y a la seguridad. Entonces, el apilar leyes en una rápida carrera hacia el futuro da herramientas pero, a la vez,

por utilizar mecanismos que son razonables en el tratamiento de cualquier proyecto, como el criterio de revisión por parte de las cámaras para introducir alguna modificación, lo que se logra es avanzar con iniciativas en un estado de semi-terminación. Siempre es algo, pero en muchos casos no se trata de la herramienta debida.

El señor senador Agúndez ha destacado claramente que el bloque al que pertenezco no quiere poner ningún obstáculo a este asunto y, por tal motivo, en virtud de un pedido de la propia autoridad del Poder Ejecutivo ha optado por respaldar el proyecto en consideración tal como ha sido redactado originalmente.

Sin embargo, señor presidente, me da la sensación de que la escena no sólo se debe completar con una acción policial que ensamble, como bien ha dicho el señor senador Pichetto, sino también con una acción judicial que ensamble. Y eso implica una línea que le dé soporte conjunto a la acción de tres poderes que algo tienen que ver en esto: el Parlamento, con la sanción de leyes; el Poder Ejecutivo, con los brazos de ejecución, que son las fuerzas de seguridad, y, finalmente, el Poder Judicial.

En ese orden de ideas; quiero destacar la tarea desarrollada por el señor senador Agúndez en ocasión de la presentación de un proyecto allá por 1998, que hubiera evitado los titulares catastróficos de los diarios de ayer en los que, con respecto al tema de los secuestros exprés, se da cuenta de un “asalto” a una institución hospitalaria para rescatar a un notable jefe de una banda dedicada a la mencionada actividad.

Por ese proyecto del señor senador Agúndez, que lleva el número de expediente S.-1.941/98, se solicitaba al Poder Ejecutivo que implementara la ley 24.660, de ejecución de las penas privativas de libertad, y generara el Hospital Penitenciario. Cualquiera de los señores senadores quizás pensará que poner en funcionamiento el hospital penitenciario tiene el costo de crear algo similar al Hospital Militar o al Hospital Naval. No es así.

En realidad, basta con concentrar los recursos dispersos en muchas áreas para direccionarlos hacia una sección en un hospital que concentre los casos del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires, donde los problemas de seguridad son agudos, y, de esa manera, evitar la carnicería que se dio en el día de ayer.

Se puede sancionar una ley y solucionar el problema del que dan cuenta los diarios o, de lo contrario, habrá que crear el programa de indemnización al testigo, que no es el de protección de testigos. Lo que sucedió ayer ocurrió con un delincuente, pero perfectamente podría haber pasado con un testigo cuya identidad cuesta mantener reservada en asuntos de gran envergadura y que, eventualmente, estuviera en el hospital.

Cuando uno mira las noticias, además de ver lo que pasó con el señor Larco Benítez, según el diario "Clarín", un delincuente pesado, jefe de una banda dedicada a los secuestros exprés, se entera de que se fusiló de un tiro en la cabeza a uno de los tres agentes que custodiaba al detenido, de 23 años y finalmente fallecido en el Hospital Churrua, a un médico, que no tenía nada que ver, le pegaron un balazo en la espalda, mientras bajaba por una escalera caracol y a un joven, que había llegado al hospital por los golpes propinados por un patovica, le dieron dos balazos mientras estaba en una camilla. Luego de eso hubo otro muerto en el bandó de los delincuentes, en un tiroteo acaecido en la playa de estacionamiento del hospital, y los refuerzos que llegaron desde la comisaría cercana ultimaron a otro de ellos cuando ya habían cruzado una zona extensamente poblada.

Tal vez todo este episodio habría podido ser evitado si se hubiesen invertido unos pocos pesos para la separación de un área hospitalaria para construir un hospital penitenciario. De esta forma se podrían evitar estas muertes innecesarias y luctuosas.

Digo esto, a título de acotación, porque en este párrafo de legislación penal lo que muchas veces prevalece, por la inercia propia de las leyes, son los proyectos del Ejecutivo o de los bloques que tienen la mayoría en determinado momento. En alguna oportunidad, si uno revisa la lista de proyectos que andan por ahí, observa que hasta un proyecto de declaración que pone la bala en el centro del blanco, como sucede en este caso, puede resultar muy útil a fin de evitar un problema que luego se transforma casi en la noticia del día, como ha sido este episodio sucedido el lunes a la tarde.

Quería hacer esa aclaración que no solamente va en reconocimiento a la labor del presidente de la Comisión de Asuntos Penales de esta

Cámara durante muchos años, sino que creo que nos tiene que llamar la atención a todos, porque realmente es muy necesario completar el plano legislativo. De todos modos, el plano de la ejecución en lo administrativo, es decir, todo aquello que hace a la parte ejecutiva y a la judicial, es cada vez de mayor relevancia frente a lo que es un Congreso que intenta ponerse a tono con la sociedad y tapar los agujeros legislativos, pero que en los hechos es todo un sistema que no sabe cuántas manos más poner para tapar los agujeros que van produciendo el incremento de la delincuencia.

Sr. Presidente (López Arias). – Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

177

FONDO PERMANENTE DE RECOMPENSAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Creo que a continuación de este tema deberíamos considerar el proyecto de ley en revisión sobre creación del Fondo Permanente de Recompensas.

Sr. Agúndez. – Estoy de acuerdo.

Sr. Presidente (López Arias). – A ver si podemos ordenar un poco la sesión, señor secretario. En el orden del día estaba incluido el tema de las recompensas.

Sr. Secretario (Estrada). – Sí; en realidad, previamente estaba incluido el tema de las cámaras federales, pero no veo inconvenientes.

Sr. Presidente (López Arias). – Es lo mismo. Son temas relacionados entre sí.

Sr. Agúndez. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Agúndez.

Sr. Agúndez. – Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente C.D.-27/03, puesto que en el día de la fecha se terminó de firmar el dictamen en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y en la de Presupuesto y Hacienda.